

POTENCIA SOCIETAL, EMPATE CATASTRÓFICO Y CONTRAHEGEMONÍA EN BOLIVIA

*Franklin Ramírez Gallegos*¹
*Pablo Stefanoni*²

Desde el año 2000, Bolivia asiste a un escenario de radicales transformaciones políticas, económicas y sociales. Las crisis de 2003 y 2005 pueden leerse como parte de la deslegitimación del sistema político y la emergencia de nuevas identidades de base campesina e indígena que –desde el ámbito institucional y extrainstitucional– introdujeron una disputa de sentidos en cuanto a lo que debe entenderse por nación y democracia en el país. En ese contexto, las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005 aparecen como una posibilidad de resolución del actual “empate catastrófico” y construcción de un nuevo escenario de gobernabilidad democrática.

SOCIAL POTENTIAL AND CONSTRUCTION OF COUNTER-HEGEMONY IN BOLIVIA

Since 2000, Bolivia has been the scene of profound political, economic, and social transformations. One can view the crises of 2003 and 2005 as a part of a delegitimization of the political system, and as an emergence of new *campesino* and indigenous identities that –from an institutional and extra-institutional perspective– questioned the meaning of nation and democracy in Bolivia. In this context, the December 18, 2005 presidential elections present the opportunity for the resolution to the “catastrophic stalemate” and the construction of a new democratic system.

POTENTIEL SOCIAL ET CONSTRUCTION D'UNE CONTRE-HÉGÉMONIE EN BOLIVIE

Depuis l'an 2000, la Bolivie est confrontée à de profondes transformations politiques, économiques et sociales. Les crises de 2003 et 2005 peuvent être entendues comme l'illustration d'un processus de délégitimation du système politique, et de l'émergence de nouvelles identités prenant leur racine dans le mouvement paysan et indigène. Se développant à partir d'un cadre institutionnel comme extra-institutionnel, ces nouvelles identités sont à l'origine d'une lutte de sens relative à ce que l'on doit entendre par les termes de nation et de démocratie dans le pays. Dans ce contexte,

¹ Sociólogo. Doctor (c) Sciences Politiques Universidad París VIII-CSU.

² Periodista, economista e investigador social. Premio de sociología “Agustín Cueva”, Ecuador, 2004.

les élections présidentielles du 18 décembre 2005 apparaissent comme une possibilité de résolution de l'actuelle "égalité catastrophique", et de construction d'un nouvel espace de gouvernabilité démocratique.

No existe el pacto o acuerdo constitutivo y sin eso la democracia se vuelve una discusión de abogados sobre un contrato que no existe.

RENÉ ZAVALA, *Las masas en noviembre*.

Introducción

Desde 2000, Bolivia enfrenta una fuerte desestabilización de las identidades políticas construidas durante las últimas décadas³ y el fracaso de los intentos operados desde mediados de los años ochenta por resignificar (en un sentido "neoliberal") la idea de nación hegemónica, sedimentada desde la Revolución Nacional de 1952 ("nacionalismo revolucionario"). En los últimos cinco años, la política boliviana ha estado marcada por la irrupción de los movimientos campesinos e indígenas en la escena nacional y la construcción de nuevas solidaridades políticas, en las que la etnicidad actúa como "enmarcador ideológico" de la acción colectiva popular y la construcción de afinidades y diferencias dentro del campo político boliviano. Sin embargo, esta construcción "étnica" del pueblo se articuló con la recuperación —selectiva— de los viejos significantes y clivajes característicos del nacionalismo revolucionario que, luego de la crisis del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a inicios del siglo XXI, quedaron "a disposición" de los discursos políticos emergentes.

Esta "nueva izquierda" está lejos de la izquierda tradicional, tanto en su discursividad política como en sus formas organizativas. Como veremos más adelante, los sindicatos siguen siendo la principal fuente de renovación política y del crecimiento de la izquierda en el país, pero el núcleo ya no es obrero, fabril o minero⁴ sino, básicamente, los

³ Siguiendo a Aboy (2005), definimos la identidad política "como el conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos". En Bolivia la identidad política dominante desde 1952 ha sido el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, populista), que a partir de 1985 sufrió fuertes desplazamientos identitarios (de la promesa de "justicia social" al privilegio del "orden" frente a la hiperinflación y el "caos" social de mediados de la década de los ochenta) que condujeron a la desaparición de su dimensión nacional-popular, anulando el juego pendular entre "ruptura" e "integración" propia del populismo (para esta definición de populismo, cfr. Aboy, *op. cit.*).

⁴ Desde 1952, los mineros constituyeron la columna vertebral del movimiento obrero boliviano. Como se vio en octubre de 2003 ("guerra del gas") el "mito minero" aún pervive en el imaginario social aunque, efectivamente, la cultura minera "radical" se reduce a lo que Magdalena Cajías (2004) llama "lugares de la memoria", especialmente las minas de Huanuni. Un elemento importante, también señalado por Cajías, es que, en los últimos años, los mineros se han visto obligados a buscar alianzas e incorporar métodos de lucha de las comunidades (campesinas) vecinas a las minas, luego de que durante décadas se percibieran a sí mismos como alejados de la cultura indígena y más cercanos a ideologías "occidentales"

sindicatos campesinos (Tapia, 2004); es decir, asociaciones territorializadas de familias, unificadas por obligaciones y derechos en torno a la posesión familiar-comunal de tierras y responsabilidades políticas locales (García *et al.*, 2004). Se trata de una expansión desde el campo hacia las ciudades, como lo muestra la evolución del Movimiento al Socialismo (MAS), que desde un núcleo territorial específico —la región cocalera del Chapare, en el trópico de Cochabamba—, se desbordó hacia el ámbito nacional como fuerza articuladora de diversos sectores subalternos, urbanos y rurales. Como señala Tapia (2004), estas transformaciones fueron acompañadas por un significativo desplazamiento, desde un discurso obrerista —en el sentido que la clase obrera era el sujeto articulador de la nación y el proyecto político— hacia un sujeto indio y campesino.⁵ Modificación preparada por el desarrollo del katarismo en los años setenta⁶ que, a partir de una nueva intelectualidad aymara y quechua urbana, denunció el “colonialismo interno” e instituyó nuevas fronteras entre “indios” y “*q’aras*” (blanco-mestizos). En tal sentido, puede observarse la consolidación de una estructura discursiva, a partir del MAS, que intenta articular —no sin problemas— elementos del discurso katarista (étnico-cultural), del mencionado nacionalismo revolucionario de los años cincuenta (dicotomización del campo político) y de la izquierda tradicional (clasista).

En los párrafos que siguen realizaremos un balance provisorio de la crisis de mayo y junio de 2005, y del actual proceso electoral, avanzando en un análisis que nos permita elaborar algunas hipótesis sobre las potencialidades y límites del actual escenario de cambio político-social, que puede derivar en un triunfo electoral de la izquierda y la investidura del primer presidente indígena en la historia de Bolivia.⁷

Crisis estatal

El 9 de junio de 2005 encontró su fin la aguda crisis política que acabó con la administración de Carlos Mesa (2003-2005), quien, a su vez, sucedió anticipadamente a Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, luego de su huida a Estados Unidos en medio de cruentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas armadas del Estado.⁸ Un acuerdo parlamentario hizo posible la asunción como presidente de la República del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, y la convocatoria a elecciones generales anticipadas, que incluyen la renovación del Parlamento, originalmente previstas para el 4 de diciembre y

(fundamentalmente nacionalistas y de izquierda). En Bolivia puede hablarse de una suerte de “marxismo minero”, el cual, desde los años cuarenta, estructuró sus marcos de acción colectiva e interpretación de la realidad boliviana, y fue irradiado hacia otros sectores populares.

⁵ Sobre las complejidades de la categoría “indio” y su carácter relativamente contingente *cfr.*, entre otros, Lavaud y Lestage (2002), los comentarios de García Linera en la misma edición y Lagos (1997).

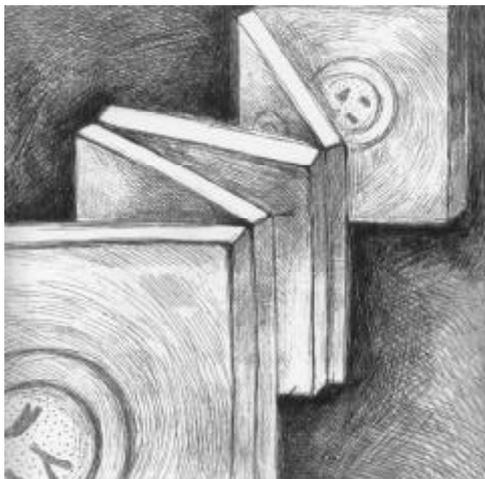
⁶ Para un análisis de esta corriente, *cfr.* Silvia Rivera Cusicanqui (1983).

⁷ Es importante considerar que este artículo fue escrito durante la última semana de noviembre de 2005 [nota del editor].

⁸ La denominada “guerra del gas”, contra la exportación del energético por puertos chilenos —país que en la Guerra del Pacífico, en 1879, se apropió del litoral marítimo boliviano— tuvo un saldo de más de 60 muertos y centenares de heridos.

postergadas para el 18, luego de los enfrentamientos provocados por la distribución regional de escaños.⁹ Los acuerdos también incluyen la convocatoria a Asamblea Constituyente y a referéndum, por autonomías departamentales, para julio de 2006.

De esta forma se intenta procesar en el terreno electoral lo que García Linera (2005)



caracteriza como una “crisis estatal general”, concepto que abarca pero no se agota en la crisis del modelo económico de libre mercado, aplicado desde 1985, y se extiende a la correlación de fuerzas políticas, el sistema institucional y el conjunto de creencias irradiadas desde el Estado, percibido como un andamiaje construido sobre la preservación de mecanismos coloniales que consagran prestigio, propiedad y poder en función del color de la piel, el apellido, el idioma y el linaje (*Ibid.*). La crisis se ha abierto y ha sido empujada, entonces, por una disputa de sentidos sobre la bolivianidad y la contundente emergencia de imaginarios sociales de raíz igualitarista.

Esta crisis incluye, también, una fractura —o *falla*— territorial entre el oriente y el occidente bolivianos, que tiene como consecuencia un sistema de “hegemonías mutiladas”: liderazgos indígena-plebeyos (neoestatistas) en el occidente y liderazgos empresariales (libremercaderistas) en el oriente, sin que ninguno de ellos pueda irradiar su hegemonía al otro lado de la frontera imaginaria que separa a ambas “Bolivias”.¹⁰ En el texto citado, García Linera (2005:29) identifica “una doble paradoja”. “Por una parte, el bloque social que se levanta y reivindica la pujanza de una economía moderna [las élites empresariales cruceñas, que reclaman autonomía departamental] tienen una lectura de la territorialidad estatal no moderna, de tipo señorial, por lo que carecen de fuerza cultural y simbólica para alzarse con un liderazgo nacional. En tanto que quienes se erigen sobre la precariedad de una economía tradicional (urbano-campesina) sí leen el espacio nacionalmente, pero carecen del sustrato material

⁹ La “guerra de los escaños” se desató luego de un fallo del Tribunal Constitucional que instruyó al Parlamento a distribuir los escaños entre las regiones, de acuerdo con el censo poblacional de 2001. Después de varias idas y vueltas, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé dictó un decreto que le asignó tres bancas adicionales a Santa Cruz de la Sierra y una a Cochabamba, en detrimento de La Paz (que perdió dos), Oruro (1) y Potosí (1). Además, establece que los comicios se realizarán el 18 de diciembre (originalmente estaban previstos para el 4), sin afectar la fecha de transmisión del mando (22 de enero de 2006).

¹⁰ La dificultad de articulación reside en el clivaje político, étnico y cultural que separa a ambas Bolivias: mientras en el occidente “colla”, mayoritariamente indígena, ha emergido un potente ciclo de acción colectiva popular que cuestiona el modelo neoliberal, vigente en el país desde 1985, y promueve un proceso de descolonización radical de la sociedad; en el oriente “camba” perdura la hegemonía de los partidos que administraron dicho modelo, en un contexto de mayor debilidad organizativa (y autonomía ideológica) de los sectores populares.

para liderar la economía, pues no se construyen Estados modernos desde la pequeña economía doméstica-familiar”.

Luego de la radicalización de ambas “agendas” –durante la crisis de mayo y junio que provocó la renuncia del presidente Carlos Mesa– ambos sectores comprendieron que estaban entrampados en un “empate catastrófico” (ninguno puede actuar como el *hegemon* de un proyecto nacional), lo que favoreció el tránsito hacia las elecciones anticipadas como escenario de resolución del empate, de renovación del sistema político y construcción de un nuevo escenario de gobernabilidad democrática.

Así, de “un día para el otro”, cesaron las movilizaciones callejeras y el combate político-ideológico se trasladó al nuevo terreno. Los sectores sociales –“radicales” y “moderados”–¹¹ comenzaron a discutir internamente cómo afrontar el desafío de la hora: transformar la fuerza de movilización –incluyendo el control de amplios espacios territoriales arrancados provisoria y temporalmente al Estado– en fuerza electoral. El MAS –surgido en 1995 como una “confederación” de organizaciones sindicales, principalmente campesinas, con su núcleo duro en las regiones cocaleras y autodefinido como el “instrumento político” de estas organizaciones–, que lleva como candidato presidencial a Evo Morales, es hoy el centro de confluencia de los movimientos sociales –fortalecido por el fracaso de la candidatura “radical” del líder de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, y el debilitamiento del caudillo aymara y candidato presidencial del Movimiento Indígena Pachacutik (MIP), Felipe Quispe–. Se trata de una organización con “estructuras indirectas”, en la cual la participación en las instancias sindicales de base es el canal de acceso a la participación política, lo que dificulta la consolidación *masista* en las ciudades, especialmente entre los segmentos “modernos” de la población, sin fidelidades comunitario-corporativas. Como señala Patzi (2003), “no son partidos que se insertan en el movimiento (social) para articularse con él sino que salen de él”. La lógica corporativa impregnó las discusiones tendientes a lograr la “unidad de la izquierda” y la negociación de cargos para el “grupo corporativo” –gremial o vecinal– y reactualizó concepciones prebendalistas, sólo parcialmente debilitadas, de la política.

El gas de la discordia

La nueva ley de hidrocarburos es indisoluble del clima nacionalista vinculado a la “recuperación de los recursos naturales”, hoy en manos del capital transnacional. El referéndum celebrado el 18 de julio de 2004 –como parte de la “agenda de octubre” (de 2003)– arrojó un masivo resultado en favor de una mayor regulación estatal del negocio hidrocarburífero. La nueva norma establece, entre otras determinaciones, el aumento de la combinación de regalías e impuestos sobre la producción (18 más 32 por ciento) hasta llegar al 50 por ciento de la “torta petrolera” para el Estado; la migración obligatoria de las empresas a nuevas modalidades contractuales (que reconozcan la propiedad estatal en boca de pozo); la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y el derecho de consulta –no vinculante– de los

¹¹ Esta división, como veremos más adelante, no es muy adecuada para analizar los clivajes políticos al interior de los movimientos sociales bolivianos.

pueblos indígenas afectados por la actividad petrolera. En este sentido, la ley constituye una versión “moderada” de la propuesta del MAS que, desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso, promovió el aumento de las regalías al 50 por ciento, la fijación estatal del precio del gas y la anulación de los actuales contratos de riesgo compartido (previa a la *migración* obligatoria de las empresas hacia nuevos contratos), y representa una suerte de empate para los movimientos sociales.

Desde 2000, Bolivia enfrenta una fuerte desestabilización de las identidades políticas [...] y el fracaso de los intentos operados [...] por resignificar (en un sentido “neoliberal”) la idea de nación hegemónica

Empero, pese a la “moderación” de la norma, las empresas petroleras, la cooperación internacional y los organismos multilaterales de crédito, manifestaron su oposición a las nuevas regulaciones, lo que llevó al ex presidente Mesa a desistirse de promulgar “una ley suicida para el país” (fue promulgada por el entonces presidente

del Congreso, Hormando Vaca Díez), y hoy las propias empresas reconocen haber frenado las inversiones ante su desacuerdo con una “ley confiscatoria e indigerible”,¹² y amenazan con juicios y arbitrajes internacionales, amparadas en los acuerdos de protección de inversiones firmados por Bolivia, si son obligadas a cambiar de contrato,¹³ en un contexto estructural en el que los discursos “soberanistas” se enfrentan a la realidad de que Bolivia “vive de la cooperación internacional”, incluso para pagar los salarios de la administración pública.

“Moderados” y “radicales”, una frontera difusa

En Bolivia es común la distinción de dos bloques dentro del complejo y fragmentado mapa de los movimientos sociales: por un lado, un sector “radical”, con expresiones en la ciudad de El Alto (en la central obrera regional y la federación de juntas de vecinos), en el movimiento campesino (principalmente aymaras del altiplano paceño), y en sindicatos como los de los maestros rurales y urbanos. También se incluye en este bloque a la Central Obrera Boliviana (COB) —dirigida por Jaime Solares— sin capacidad efectiva de movilización autónoma. Por otro lado, se perfila un bloque “moderado” (algunos lo denominan “reformista radical”), liderado por el MAS, cuya columna vertebral son los sindicatos cocaleros, con influencia en los valles de Cochabamba, el oriente boliviano y otras regiones del país.

Pese a la firma de un “pacto de unidad” entre los líderes de ambos bloques, en marzo de 2005, las divergencias y desconfianzas mutuas han provocado una rápida ruptura y es común escuchar acusaciones de “traición” contra el líder del MAS entre los dirigentes de organizaciones como la COB. El MAS ha rechazado consignas enarboladas por los sectores “radicales”, como el cierre del Parlamento —un “símbolo de la

¹² Varios comunicados de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH).

¹³ Cfr. Abdel Padilla y Pablo Stefanoni (2005).

democracia pese a la conducta de los congresistas” – y un eventual golpe de Estado “venga de donde venga”.¹⁴

Sin embargo, las fronteras entre estos dos amplios agregados no siempre son tan nítidas y esta división binaria –como veremos más adelante– oculta por momentos más de lo que aclara: que en la ciudad de El Alto haya sido reelegido, con más del 50 por ciento de los votos, el alcalde José Luis Paredes, partidario del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y aliado del actual candidato conservador Jorge “Tuto” Quiroga y ex presidente (2001-2002),¹⁵ puede servir como una primera advertencia frente a estas divisiones cartesianas –y, en ocasiones excesivamente simplificadas– del espacio político boliviano.

En las últimas semanas de la crisis de mayo-junio, la consigna de la nacionalización –excluida del referéndum del gas de 2004– fue ganando terreno entre los movimientos sociales, y se ha ido transformando en una suerte de significativo “medio vacío y medio lleno”¹⁶ en el que se inscriben los deseos populares de poner fin a los constantes saqueos transnacionales de los recursos naturales del país, luego de los cuales sólo quedan provocativas huellas de riquezas ya inexistentes, rodeadas de mares de privaciones y pobreza crónica: en cierta forma, varios agravios, que tienen poco que ver con esta demanda, se expresan por medio de ella.¹⁷ La mayoría de los bolivianos ven en la recuperación de la renta petrolera la “última oportunidad” de despegue del país y de acceso a una modernización inclusiva, en lo que posiblemente no estén ausentes mitos arraigados, como el del “destino nacional adverso”: “una fuerza hostil, un poder nefasto que condena al país a una penosa existencia y que lo hace su víctima inocente, impidiéndole alcanzar la plenitud de su ser” (Francovich, 1980).

Al mismo tiempo, esta consigna se ancla en cadenas de memoria que remiten a hitos nacionalizadores como la ocupación militar de la *Gulf Oil Company*, durante el gobierno militar de Alfredo Ovando, y al ministerio del mítico líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1969. La dificultad reside, en todo caso, en que estas nacionalizaciones previas afectaron a una o dos empresas, mientras que hoy operan en el país una docena de empresas petroleras extranjeras, al margen de otros problemas relacionados con las transformaciones técnico-productivas operadas en las últimas décadas de mundialización capitalista y la debilidad institucional bolivianas.¹⁸

¹⁴ Declaraciones de Evo Morales en entrevistas televisivas (mayo de 2005). Jaime Solares ha señalado que si aparece en Bolivia “un Chávez” o algún militar patriota lo apoyaría, lo que generó críticas del resto de los líderes sociales, bajo la interpretación de que estaba promoviendo un golpe cívico-militar.

¹⁵ Paredes es actualmente candidato a prefecto por La Paz, en alianza con Quiroga.

¹⁶ Aunque no se trata de una demanda con un proyecto político-técnico en su interior, se asienta en un arraigado efecto de memoria colectiva del que surgen interpretaciones diversas sobre lo que debería ser la medida nacionalizadora. Cada uno tiene su versión más o menos gaseosa y amplia (pero con tremendos efectos de unificación de la acción colectiva plebeya): es esa polisemia la que impide hablar de un significativo vacío –hay además evocaciones a la expropiación, a la vía venezolana, a la toma de control militar, entre otros–, y marca los límites de lo que *no* puede seguir funcionando como hasta ahora: patrimonios naturales por fuera del control de la nación (piedra angular del neoliberalismo a la boliviana).

¹⁷ En alguna medida, detrás de la nacionalización de los hidrocarburos está la propia nacionalización del gobierno y el Estado bolivianos.

¹⁸ Por ejemplo, es casi nula la discusión de una posible integración petrolera con Venezuela y con Petrosur. Y, antes de discutir un proyecto de desarrollo, casi todos los sectores se lanzaron a intentar

Por otro lado, la “toma del Parlamento”, promovida por estos sectores (radicales) durante la crisis, no tiene una proyección política más allá del “acto” (e incluso, de la retórica ultraradicalizada de las reuniones sindicales). El “súbito” pasaje a la normalidad luego de las jornadas de mayo y junio, e incluso el apego a la legalidad constitucional –frente a la posibilidad de asenso a la presidencia, por sucesión constitucional, del resistido presidente del senado, Hormando Vaca Díez, la Fejuve y la COR alteñas reclamaron la asunción de Rodríguez Veltzé y la convocatoria a elecciones generales– pone de relieve ciertos matices en este clivaje entre moderados y radicales, y advierte sobre los riesgos del corporativismo sindical –o vecinal– que, corrientemente, conlleva repliegues hacia el ámbito local como espacio de reproducción de los discursos radicales.

El balance acerca del paro cívico alteño –que paralizó la ciudad durante los 16 días de la crisis– muestra la ausencia de una estrategia de “retirada ordenada”. Los bloqueos se fueron levantando –por decisión de las juntas vecinales– apenas juró Eduardo Rodríguez Veltzé, sin que hubiera aún una decisión de la Federación, que algunas horas después decidió un cuarto intermedio sin conseguir la satisfacción de ninguna de las demandas, quedando como triunfo el haber impedido la asunción de Vaca Díez como sucesor constitucional de Carlos Mesa.¹⁹

En el caso del MAS, la apuesta es a una “guerra de posiciones” por medio de movilizaciones callejeras, lucha parlamentaria y consolidación territorial, principalmente a partir de los municipios del área rural.²⁰ Apelando a la articulación de significantes nacional-populares con algunos de orden étnico, este movimiento de origen cocalero ha avanzado parcialmente en su propia “descorporativización” –“descocalización” en sus propios términos– para articular una pluralidad de demandas sociales en un espacio identitario común. Sin embargo, hasta el momento, la inestabilidad de la “suma corporativa” conseguida ha resultado insuficiente para construir una frontera política más estable entre el “pueblo” y las élites gobernantes.²¹ Pese a lo cual, el MAS ha avanzado en ese sentido y hoy resulta claro que es el único movimiento surgido del ciclo de acción colectiva popular iniciado en abril de 2000 (a partir de la guerra del agua en Cochabamba)²² con proyección nacional y capacidad para disputarle los votos a los partidos políticos sistémicos.

En el nuevo escenario electoral, este movimiento de base cocalera intenta tender puentes con las clases medias y acomodadas urbanas, a las que –por estar sustentado en una cultura sindical ajena a los procesos de individuación modernizante operados

captar “su parte” de la nueva torta, proveniente del aumento de los impuestos petroleros (Impuesto Directo a los Hidrocarburos, del 32 por ciento de la producción).

¹⁹ La concentración de la fuerza de movilización en impedir que el presidente del Congreso –asociado a la política tradicional– llegara al Palacio Quemado por sucesión constitucional, fue parte de los “golpes de timón” que los movimientos sociales debieron realizar sobre la marcha. El ascenso de Hormando Vaca Díez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, a pesar de su sigla, de centroderecha) hubiera consagrado una paradoja: que la segunda guerra del gas repusiera en el poder a los expulsados por la primera.

²⁰ Durante los últimos bloqueos en el Chapare, en el trópico de Cochabamba (mayo de 2005), fue evidente la utilización de recursos municipales para fortalecer las medidas de fuerza.

²¹ Sobre el concepto de frontera política *cfr.* Laclau (2005).

²² Sobre este tema *cfr.*, entre otros, Gutiérrez Aguilar (2001).

en las ciudades— le cuesta trabajo atraer hacia su proyecto político.²³ La propia *indianidad* —junto con su falta de escolarización— emerge como un estigma de su líder y candidato —Evo Morales—, que conspira también contra ese objetivo, en una sociedad donde pervive lo que los kataristas de los años setenta denominaron “colonialismo interno” —en el marco del cual, la etnicidad aún opera como un capital negativo en la construcción de prestigio e influencia política y social—. De ahí que no sea casual la postulación del intelectual de izquierda Álvaro García Linera como compañero de fórmula —y “complemento”— de Evo Morales para las elecciones de diciembre de 2005.²⁴ A la incorporación de García Linera (ex miembro del Ejército Guerrillero Tupaj Katari)²⁵ se sumó la alianza con el Movimiento Sin Miedo (MSM), que gobierna la ciudad de La Paz y contiene en sus filas a sectores medios urbanos progresistas.

se intenta procesar en el terreno electoral [...] una “crisis estatal general” [que abarca la crisis del modelo económico de libre mercado [...] la correlación de fuerzas [...] el sistema institucional y el conjunto de creencias

En el plano programático, la oferta del MAS propone un proyecto reformista (con un fuerte carácter nacionalista) de modernización del país en el marco del capitalismo, propiciando un proceso de articulación “no brutal” entre las diferentes plataformas económicas que conforman la economía boliviana —la moderna-industrial, la familiar y la comunitaria— en una perspectiva de “*shock* productivo”. Esto se lograría mediante el control y las transferencias, por parte del Estado, del excedente derivado de la “nacionalización efectiva” de los hidrocarburos. García Linera sintetiza así el proyecto *masista* al que denomina “capitalismo andino-amazónico”: “La idea es que los segmentos de la economía tradicional tengan soporte económico, acceso a insumos, a mercados, que generen en su régimen económico (artesanal y familiar) procesos de bienestar”.²⁶

El sustrato está en una caracterización previa hecha por el candidato vicepresidente de la izquierda boliviana: que la erosión de las economías familiares y la crisis —“material y simbólica”— del viejo movimiento obrero saca al socialismo de la agenda de corto y mediano plazo: “Por ahora hay dos razones que no permiten visualizar la posibilidad de un régimen socialista. Por un lado, existe un proletariado minoritario demográficamente y políticamente inexistente, y no se construye socialismo sin proletariado. En segundo lugar, el potencial comunitarista agrario y urbano está muy debilitado [...] sigue habiendo comunidad pero ésta ha implosionado internamente en estructuras familiares (base del actual ciclo de movilizaciones en el país)”.²⁷ Este programa se enmarca en lo que García Linera define como “una salida pactada en la redistribución del poder en el país, que incorpore gobernabilidad social y parlamentaria [...] e incluya mecanismos

²³ La elección de candidatos para las elecciones de diciembre de 2005 fue particularmente conflictiva en las ciudades, donde no existe la legitimidad “medida” a partir del desempeño sindical, tal como ocurre en el área rural.

²⁴ Ello no deja de ser simbólico: mientras antes las élites buscaban un indio como complemento, es ahora el indio el que busca al intelectual urbano.

²⁵ Sobre el EGTK, *cfr.* Iturri Salmón (1992).

²⁶ Quincenario *El Juguete Rabioso*, núm. 138, La Paz, Bolivia, 1 de octubre de 2005.

²⁷ *Ibidem*.

de articulación para que los intereses de los derrotados sean, en parte, reconocidos por los victoriosos”.²⁸

Las autonomías departamentales

A las demandas de nacionalización se suman las de autonomía de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Tarija (en el oriente y sur del país, respectivamente). Los cruceños ya consiguieron la elección de prefectos (gobernadores) mediante el voto ciudadano (junto a las elecciones presidenciales del 18 de diciembre) y han cohesionado a los departamentos de Beni, Pando y Tarija detrás de su liderazgo regional. El comité cívico –con un fuerte componente empresarial pero con hegemonía social– legitima sus demandas en el masivo cabildo de enero de 2005 –que reunió a unas 200 mil personas– y las 300 mil firmas reconocidas por la Corte Nacional Electoral que reclamaban la convocatoria a referéndum autonómico por iniciativa ciudadana.

Son varios los que destacan que durante el periodo “neoliberal” las élites cruceñas controlaron espacios clave del aparato estatal²⁹ –entre éstos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria– y operaron directamente desde La Paz para beneficiarse de políticas públicas favorables a sus intereses, incluyendo la condonación de deudas. Y hoy temen que la próxima Asamblea Constituyente sea el escenario de la “revancha indígena”, que ponga en cuestionamiento la propiedad de la tierra en una región a la que no llegó la reforma agraria de 1953 (por considerarse, en ese entonces, que se trataba de “empresas agrícolas” –capitalistas– y no de “latifundios”). Evo Morales ha señalado públicamente que se respetará la “seguridad jurídica”, pero no las tierras improductivas.

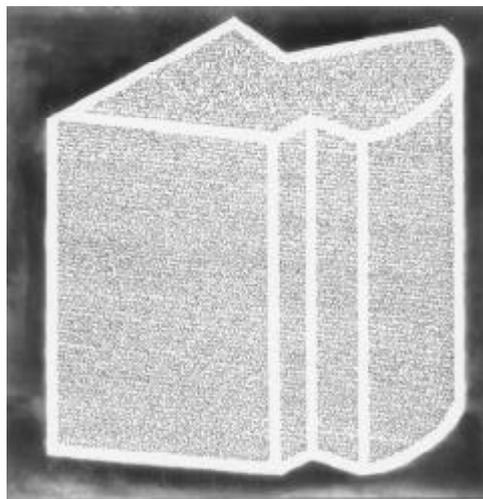
La pregunta preliminar, elaborada por el Comité Cívico para el referéndum de julio de 2006, que deberá ser aprobada por el nuevo Parlamento, ha generado fuertes susceptibilidades, ya que se menciona el control departamental de los recursos (en una zona rica en hidrocarburos y tierras con fines agroexportadores, principalmente de soya).³⁰ Desde los años setenta, la economía cruceña fue acrecentando su importancia dentro del Producto Bruto Interno boliviano y en la actualidad sus actividades económicas presentan mayor dinamismo, vinculación comercial y renovación técnica que otras regiones del país, con un fuerte peso de los servicios y las actividades extractivas y agroexportadoras (principalmente la soya). García Linera señala que en las últimas décadas “el poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha trasladado del occidente al oriente, pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en occidente,

²⁸ Cfr. *La Prensa*, La Paz, Bolivia, 8 de noviembre de 2005.

²⁹ El director del Centro de Investigaciones Jurídicas e Investigaciones Sociales (CEJIS), Carlos Romero, explica que “Desde los años 60 y 70 Santa Cruz se ha favorecido con una gran transferencia del excedente minero de Oruro y Potosí a través del gobierno central, mediante créditos, construcción de complejos agropecuarios, infraestructura caminera, etc.”. Y sostiene “que más que marginada, Santa Cruz fue privilegiada con esos excedentes que le permitieron integrarse al mercado exportador. Por ello, lo del ‘andinocentrismo’ es relativo”.

³⁰ Existen en Santa Cruz grupos secesionistas como Nación Camba, con escasa influencia social, pero con un discurso que corrientemente da sustento histórico y político a varias demandas autonómicas.

dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica en el país". Y concluye que "mientras en el occidente emergieron construcciones discursivas que asociaron la crisis económica al neoliberalismo, en el oriente —donde perdura una hegemonía cultural empresarial— se asociaron los padecimientos al centralismo paceño y no al modelo económico".³¹ Lo cual explica en gran medida ciertos marcos interpretativos que sostienen la lucha autonómica oriental y su penetración en el mundo popular cruceño (sólo algunos grupos indígenas acusan a los cívicos de representar a la "oligarquía" y no al conjunto de la región). Adicionalmente, actitudes abiertamente racistas —como los intentos de la Unión Juvenil Cruceñista de impedir, con palos, el ingreso de una marcha campesina a la ciudad de Santa Cruz en junio de 2005— han potenciado los clivajes étnico-regionales en ausencia de liderazgos nacionales con capacidad para articular la diversidad societal, étnica y clasista —lo que el sociólogo René Zavaleta definió como el "abigarramiento" del país— que define a esta nación andino-amazónica.



Algunas hipótesis conclusivas

El escenario político boliviano parece no haber recuperado el "centro político" ocupado hasta octubre de 2003 por las principales fuerzas políticas, partidistas y gremiales, aglutinadas en torno de la figura del defenestrado Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). La caída del *ancien régime* no ha implicado una nueva y estable configuración de las relaciones de fuerza y poder entre los principales actores políticos, alrededor de una agenda que propicie mínimas orientaciones políticas compartidas para la organización de la sociedad. El fin del ciclo estatal de hegemonía neoliberal sostenida en una *unipolaridad multipartidista de derechas*³² —que surgió luego de la crisis del gobierno reformista de la Unidad Democrática Popular (UDP) en 1985 y es cuestionado desde 2000— ha dado paso a una extrema polarización social y política, en cuyo desenvolvimiento ningún actor político posee aún capacidad para afirmar un liderazgo hegemónico en torno a una renovada agenda de gobierno.

³¹ García Linera, entrevista, La Paz, Bolivia, enero de 2005.

³² Denominación utilizada por García Linera (2005). Tal polo estuvo compuesto por el MNR, el MIR y ADN (Acción Democrática Nacionalista, fundada por el fallecido general Hugo Banzer), que se alternaron en el poder y aplicaron el modelo neoliberal, con sutiles diferencias de interpretación sobre sus velocidades y alcances, entre 1985 y 2003.

La capacidad de movilización antagonica de los movimientos sociales –que se sustenta en su control territorial de puntos estratégicos de la geografía boliviana y en la eficiente dinámica de convocatoria de unas bases intermitentemente disponibles para activar sostenidos ciclos de protesta con mecanismos no exentos de presiones sindicales (obligatoriedad de participar, entre otros)– no ha sido un recurso con poder suficiente para impulsar un programa “posneoliberal” anclado en la recuperación del control estatal de los recursos naturales y del patrimonio nacional, conculcado por anteriores gobiernos. La propuesta autonómica planteada por los poderes locales del oriente boliviano, tampoco aparece como una salida articuladora para un proceso de reforma estatal reconocido por el resto de la sociedad nacional, sino más bien, un atrincheramiento en lo regional-local.

En suma, la transición política posterior al derrocamiento presidencial de octubre de 2003, aún no se ha completado: el realineamiento de los campos de poder coloca a unas élites fracturadas y desorientadas ante la contundente presencia de las organizaciones y movimientos sociales, cuya pluralidad de demandas y reivindicaciones ha desbordado a una institucionalidad estatal en déficit crónico de reconocimiento y de recursos políticos o redistributivos con que enfrentar las crisis. De ahí que muchos apuesten a que las elecciones generales adelantadas sean capaces de expresar las actuales polarizaciones político-ideológicas y permitan constituir bloques hegemónicos, articuladores de voluntades colectivas, por encima de los mencionados particularismos (regionales, clasistas o étnicos) que caracterizan a la formación social boliviana.³³

La acelerada descomposición de la legitimidad estatal –visible en la prolongada ausencia de satisfactores de expectativas para las grandes mayorías de la población, en el corriente desconocimiento de las estructuras de autoridad política y en una difusa adhesión a los principios y valores del régimen político “democrático-liberal”– es inversamente proporcional al creciente proceso de legitimación política de las demandas societales antineoliberales, entre éstas la nacionalización de los recursos naturales. Por otra parte, el acuerdo parlamentario para habilitar ambas agendas se parece más a una tregua que a un pacto de largo aliento entre las dos fuerzas enfrentadas y con tendencias a *replegarse sobre sí mismas*.

Ello es evidente en las pretensiones autonómicas de las élites cruceñas, que ven en tal figura la posibilidad de un abierto distanciamiento, no sólo respecto al Estado sino frente al resto de la sociedad nacional, visualizada como conflictiva y “estancada”. La opción que se dibuja ante tal fractura es la *reclusión* en lo regional/departamental, como un espacio soberano desde el cual pueden inmunizarse de la inestabilidad

³³ Según el sondeo realizado por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado y publicado por el matutino *La Razón* (La Paz, 18-9-05), Evo Morales está primero con el 28 por ciento, frente al 22 por ciento de Jorge Quiroga. Otra medición realizada casi en el mismo periodo por Encuestas & Estudios, publicada por el diario *La Prensa* (La Paz, 22-9-05), le asigna al binomio del MAS el 26.1 por ciento, contra el 22.6 por ciento de Quiroga. Según una tercera encuesta, realizada por Equipos Mori, el MAS le ganaría a Podemos, por 33 por ciento contra 27 por ciento, en tanto que una cuarta medición –realizada por la empresa Ipsos-Captura y difundida por la cadena de medios Usted Elige– ubica al candidato de la derecha con 29.2 por ciento frente al 28.3 por ciento del líder cocalero (una diferencia inferior al margen de error de la encuesta). El fuerte de Morales es el departamento de La Paz (que incluye a El Alto) donde podría superar 40 por ciento de los votos.

política nacional, contener las expansivas agendas políticas de los movimientos sociales plebeyos y controlar los recursos naturales. Los ataques al centralismo estatal y la exaltación de las posibilidades de desarrollo y democratización efectivas de sus regiones, así como una intensa recuperación de la identidad local, aparecen como complementos discursivos para justificar las bondades de este *retorno hacia lo local*.

En el campo popular, por su parte, si bien las demandas tienen un nítido carácter nacional —la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los recursos energéticos propenden hacia la “refundación del país”— han debido, muchas veces, sostenerse y afirmarse exclusivamente frente a los respectivos públicos de cada una de las organizaciones y liderazgos sociales. Tradiciones corporativas, caudillistas y vínculos comunitarios mediante cada una de las organizaciones indígenas, vecinales, sindicales, campesinas o gremiales, construyen la validez de sus pretensiones desde el repliegue sobre sus específicas bases y territorios —ahí están sus límites localistas—, desde los cuales emanan mandatos de difícil negociación tanto en el ámbito estatal de la política como con otras organizaciones y líderes sociales con los que, por lo general, tienen diferencias más de forma que de contenido, y en ello reside el riesgo de tal dinámica. Especialmente en los momentos de crisis, emerge una suerte de “competencia interdirigencial de radicalidad” en torno a la cual se hace cada vez más difícil encontrar puntos de articulación discursiva, organizativa y política que perfilen con mayor claridad una resolución de la coyuntura en su favor y, en el mediano plazo, la probabilidad misma del ejercicio de poder estatal por parte de los movimientos sociales. La “trampa de la radicalidad” en que se hallan inmersos los movimientos sociales se inserta, entonces, en un escenario de disputa de liderazgos y hegemonía al interior del propio campo popular.

La crisis boliviana —más postergada que resuelta— ha puesto de relieve que el campo contrahegemónico está aún en formación, intensamente descentralizado (política y territorialmente) y faccionalizado, por lo que el *hegemón* (cualquiera que sea) tiene problemas —organizativos e institucionales— para surgir, para condensar expectativas diversas y para hacer evidente la necesidad de un proceso articulador más o menos estable.

La demanda de nacionalización de los hidrocarburos ha conseguido, en cualquier caso, una amplia sintonía social —anclada en la memoria de las medidas nacional-populares que se expidieron en Bolivia desde la Revolución de 1952— sobre cuya base los movimientos sociales han podido acercar discursos y declinar parcialmente conductas puramente corporativas, propiciando la emergencia de una suerte de “sentido común”, en litigio con los valores irradiados por las usinas del pensamiento “neoliberal”.³⁴

El fin del ciclo estatal de hegemonía neoliberal [...] ha dado paso a una extrema polarización social y política, en cuyo desenvolvimiento ningún actor político posee aún capacidad para afirmar un liderazgo hegemónico

³⁴ Quiroga y Samuel Doria Medina (de Unidad Nacional, con posiciones de centro) han incorporado también la “nacionalización” en sus programas. Doria Medina dice en sus anuncios televisivos “[...] la fiesta para las petroleras se acabó” y propone recuperar las empresas capitalizadas (modalidad

Sin embargo, persiste un campo contrahegemónico altamente fragmentado, hoy contingente y parcialmente articulado en torno a la candidatura de Evo Morales.

Las fracturas entre los sectores populares deben situarse no sólo en relación con factores episódicos, sino en torno de: a) las contradicciones propias a la emergencia y con-solidación de toda identidad política en formación –la específica biografía del sujeto–; b) las sólidas herencias sindicales e inercias corporativas y caudillistas desde las que se han constituido y que los entranpan en una cultura política de resistencia (que puede extenderse hasta el límite del “cogobierno”, una práctica característica de la cultura popular boliviana); y c) problemas de coordinación colectiva, programática y operativa, entre la acción política subalterna en las arenas extraparlamentarias de la política y aquella que se expresa en el seno de las instituciones representativas “liberales”. La inmensa capacidad de movilización social de las organizaciones populares parece, en efecto, desconectada de la fortaleza parlamentaria del MAS y ello detendría la acumulación global de recursos de poder que el campo plebeyo viene experimentando desde hace, al menos, cinco años.

Precisamente, un cierto giro pragmático, de mayor realismo político en las filas dirigentes del MAS, así como múltiples señales de dubitación acerca de la viabilidad de la nacionalización de los hidrocarburos, parecerían haber incidido en las suspicacias de algunos movimientos sociales en su contra. Sin embargo, la práctica política del MAS ha demostrado una mayor continuidad político-institucional –decisiva, por ejemplo, en la aprobación de la actual ley de hidrocarburos– frente a las acciones mucho más cíclicas de los radicales, que parecen tener poca capacidad para “sedimentar” en la esfera institucional los avances del movimiento social.

Pese a sus vaivenes y dificultades para imaginar un escenario posneoliberal, la supervivencia de prácticas caudillistas en su interior y los límites para irradiar una contrahegemonía “cultural” como paso previo a la ocupación del Estado –pervive un fuerte *estatalismo* en la acción colectiva popular boliviana– el MAS aparece hoy como el único partido con vocación y capacidad de articulación hegemónica en el ámbito político nacional –incluyendo el oriente del país–, lo cual, no obstante, deberá verificarse en los resultados electorales de diciembre y, con no menos intensidad, en la Constituyente de junio de 2006; dos instancias que determinarán la evolución política de esta nación por varias décadas –y de sus movimientos sociales– e incidirán, sin duda, en el devenir continental.

boliviana de privatización) a través de la “compra de acciones”, en tanto que Quiroga habla de “nacionalizar los beneficios de la actividad petrolera” (*La Razón*, La Paz, 24 de octubre de 2005).

Bibliografía

- Aboy Carlés, Gerardo
2005 “Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación”, mimeo, Buenos Aires.
- Cajías, Magdalena
2004 “El poder de la memoria”, *Barataria*, octubre, La Paz, Bolivia.
- Francovich, Guillermo
1980 *Los mitos profundos de Bolivia*, Los amigos del libro, La Paz, Bolivia.
- García Linera, Álvaro
2005 “La lucha por el poder en Bolivia”, en autores varios, *Horizontes y límites del Estado y el poder*, Comuna-Muela del Diablo Editores, La Paz, Bolivia.
- García Linera, Álvaro, Marxa Chávez y Patricia Costas
2004 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia*, Diakonia-Oxfam, La Paz, Bolivia.
- Gutiérrez Aguilar, Raquel
2001 “La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. A un año de la guerra del agua”, en autores varios, *Tiempos de rebelión*, Muela del Diablo Editores, La Paz, Bolivia.
- Iturri Salmón, Jaime
1992 EGTK: *la guerrilla aymara en Bolivia*, Ediciones Vaca Sagrada, La Paz, Bolivia.
- Laclau, Ernesto
2005 *La razón populista*, FCE, Buenos Aires.
- Lagos, María L.
1997 *Autonomía y poder. Dinámica de clase y cultura en Cochabamba*, Plural Editores, La Paz, Bolivia.
- Lavaud, Jean Pierre y Françoise Lestage
2002 “Contar a los indígenas: Bolivia, México, EE.UU”, *Tinkazos*, núm. 13, La Paz, Bolivia.
- Padilla, Abdel y Pablo Stefanoni
2005 “¿Abriendo la caja de Pandora?”, semanario *Pulso*, núm. 310, 12 a 18 de agosto, La Paz, Bolivia.
- Patzi, Félix
2003 “Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía. Triunfos y vicisitudes del movimiento indígena de 2000 a 2003”, en autores varios, *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de la insurgencia indígena*, Muela del Diablo Editores, La Paz, Bolivia.
- Rivera Cusicanqui, Silvia
1983 “Luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: el movimiento ‘katarista’: 1970-1980”, en Zavaleta, René (comp.), *Bolivia hoy*, Siglo XXI Editores, México.
- Tapia, Luis
2004 “Izquierdas y movimiento social”, en autores varios, *Memorias de octubre*, Comuna/Muela del Diablo Editores, La Paz, Bolivia.